Derechos humanos de las mujeres en el proyecto de Constitución de la Unión Europea

Doris Benegas Haddad

<http://www.izca.net/documentos/dorisforum.htm>

Última consulta: 30 junio 2005

I. INTRODUCCION

La forma más exacta y fidedigna de medir la calidad de una sociedad es su concepto de los derechos humanos inalienables y sobre todo el respeto que los poderes brindan a los derechos fundamentales es decir, las garantías que se establece para su protección.

Cuanto más se garanticen y respeten en la vida real esos derechos, mas alta será la nota en las asignaturas de Democracia, Libertad y Paz y Justicia.

Cuanto más se respeten en la práctica los derechos fundamentales de las mujeres, más democrática, libre y justa será la Sociedad, y estaremos hombres y mujeres más cerca de la paz.

Igualdad ante la Ley no es igualdad ante la vida. Las grandes proclamas legales, muchas veces se han quedado en letra muerta, en letra sin vida.

Pero también es verdad que es muy difícil, si no imposible, que esos derechos sean respetados efectivamente en la vida real, si no están recogidos en la letra o textos del ordenamiento jurídico de carácter nacional o internacional, de forma clara, expresa y contundente, y no es indiferente o inocuo el modo en que éstos derechos están recogidos en las leyes. También constatamos que los Derechos Humanos no son estáticos, evolucionan en permanente construcción histórica.

Por eso, ante el refrendo o aprobación de la Constitución de la Unión Europea he creído necesario examinar cómo se reconocen e incorporan los Derechos Humanos de las Mujeres al texto del Proyecto de Constitución Europea, es decir, la perspectiva de género en esa "Ley de Leyes" o "Constitución de Constituciones" que pretende ser, la Constitución Europea.

La elaboración y aprobación de una Constitución Europea (1) era una oportunidad de oro para dar un salto hacia adelante que recogiera una visión de género conforme con las exigencias puestas de manifiesto a lo largo de los años para contribuir a hacer realidad la igualdad de derechos y a desterrar de la vida real la discriminación y explotación de las mujeres. Se ha perdido esa oportunidad y ello no es casualidad.

No ha sido así, y no sólo no ha sido así, sino que en bastantes terrenos se produce una regresión en la plasmación de esos Derechos Fundamentales, acorde con los intereses neoliberales y la reacción que desatan los progresos de las mujeres en el camino hacia nuestra autonomía, libertad, e igualdad. No podemos perder de vista que la igualdad y democracia entre hombres y mujeres es un problema de poder.

En todo estudio sobre Derechos Humanos es obligado tomar como Referencia la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10-12-48 a la que más adelante me referiré, como código mínimo de ética colectiva, y también al “Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales” de 4-11-50, adoptado en el seno del Consejo de Europa para “tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal”, cuya virtud es haberles dotado de protección jurídica eficaz con la posibilidad de Recurso individual ante el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), configurando un elemento claro de la protección de los particulares.

El Proyecto de Constitución Europea no contiene referencia alguna a la Declaración Universal de Derechos Humanos, como Derechos Humanos a garantizar. Tampoco se adhiere al Convenio Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, limitándose a decir que su contenido forma parte del Derecho de la Unión como principios generales y que la Unión “procurara adherirse” a dicho Convenio Europeo (art. 7.2º y 3º). Resulta ello doblemente chocante cuando cada uno de los Estados miembros de la Unión se ha adherido a dicho Convenio Europeo.

Como introducción cabe decir que El Proyecto de Constitución y la Carta de Derechos Humanos que incorpora, minan El Convenio Europeo y la Declaración Universal de Derechos Humanos. (2)

Antes de adentrarnos en el tema de los Derechos Humanos propiamente dichos, es necesario, para acercarnos a ellos, analizar desde una perspectiva de género: 1) En qué se inspira o en qué valores se asienta, 2) En qué lenguaje se expresa.

1. La inspiración en las herencias religiosas.

El escueto Preámbulo del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución Europea expresa que ésta se inspira en “las herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa cuyos valores, aún presentes en su patrimonio”.

Y cuando se refiere en el Título VI de la Parte I a “La vida democrática de la Unión”, bajo el epígrafe “Estatuto de las Iglesias y de las organizaciones no confesionales”, afirma que la “Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido, en virtud del Derecho nacional, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas de los Estados miembros ..., reconociendo su identidad, su aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones. (Art. 51)”

Como parte de la “vida democrática” se introduce el objetivo de mantener un diálogo estructurado de las instituciones europeas con esas iglesias y organizaciones.

Es cierto que esas “herencias” están aún presentes en nuestro “patrimonio”, pero las religiosas configuran los valores más rancios y más ofensivos para la dignidad y los derechos de las mujeres, son los valores del patriarcado, del machismo, de la subordinación de las mujeres a los hombres.

La influencia de la doctrina de la Iglesia católica ha sido muy fuerte en la cultura europea conforme al poder y control que la Iglesia adquirió sobre la vida cotidiana en Europa y no, desde luego, para bien de las mujeres y de la igualdad de derechos.

La doctrina de la Iglesia católica ha dado a las relaciones entre hombres y mujeres y al matrimonio, una configuración plenamente misógina.

La obligación de fidelidad sexual, obligación mucho más estricta para las mujeres que para los hombres, la imposibilidad de disolver el vínculo matrimonial incluso en situaciones extremas para las mujeres son un llamado a la sumisión, a la subordinación y a la resignación ante la violencia de género.

La laicidad o aconfesionalidad en la Constitución, no solamente no es proclamada, sino por el contrario, se confiere a las iglesias un derecho de intervención regular en la política de la Unión, permitiéndoles defender, con una posición de privilegio, sus opciones religiosas, en temas como la educación, la familia y la situación de las mujeres, la anticoncepción, el aborto, el divorcio, la orientación sexual, los homosexuales y lesbianas, la lucha contra el SIDA.

Como reclamaron muchas organizaciones en su momento deben suprimirse esas menciones a las herencias religiosas, o la participación de la Iglesia en la Vida Social y Política y Proclamarse la Laicidad, respetando la libertad religiosa, pero no las intromisiones y privilegios de las Iglesias en la vida social y política, ni siquiera bajo los engañosos términos de “democracia participativa”. La

separación entre las Iglesias y las Instituciones Públicas debe aplicarse a todos los terrenos de la vida en la sociedad.

2. Lenguaje sexista del Proyecto de Constitución Europea

El proyecto de Constitución Europea y la Carta de Derechos Fundamentales que se incorpora a su Parte II están escritos en lenguaje puramente sexista.

Creo no equivocarme al decir que en todo el texto de la Constitución Europea se menciona cuatro veces la palabra “mujer”, y una vez la palabra “trabajadoras”, el resto del texto está redactado en masculino (al menos en idioma castellano, y creo que en francés también).

Así, por ejemplo, la Carta de Derechos Fundamentales (Parte II del Proyecto) sólo menciona una vez la palabra mujer cuando se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres (Art. 23). El resto de la carta si bien es cierto, que en varios artículos se refiere a las personas (toda persona, las personas mayores, ...), cuando no lo hace así utiliza un lenguaje plenamente masculino (todo ciudadano, los nacionales, los trabajadores, todo trabajador, los empresarios, los menores, los jóvenes, los diputados, todo acusado, ... -Arts. 15, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46-)

Las lenguas son un reflejo de la Sociedad que las habla. Se advierte en el lenguaje utilizado en el texto de la Constitución una actitud sexista que podemos interpretar como una expresión de que la sociedad ha sido y sigue siendo discriminatoria hacia las mujeres. Discriminar a las mujeres es no visualizarlas, absorverlas en la masculinidad, también en el lenguaje.

Los cambios han de traducirse en cambios en la lengua pues de lo contrario la fuerza y potencia que tiene la lengua pueden hacer que esas actitudes se regeneren o reproduzcan.

La existencia de ese lenguaje sexista no es una cuestión meramente lingüística, sino esencialmente social (hecho por los hombres y para los hombres, para apoyar y perpetrar sus ideas, valores...) (3). Y por tanto su eliminación requiere de cambios también en la sociedad y en consecuencia en nuestras mentes.

Para que una sociedad realice esos cambios en la lengua es necesario primero, crear una conciencia de su existencia y llamar la atención sobre ellos.

En conclusión, la lengua escrita del Proyecto de la Constitución (al menos en idioma castellano y creo que en francés también) refleja la discriminación de que es objeto la mujer, y por tanto ha de

procederse a su redacción en términos no sexistas dando ejemplo primero de la conciencia sobre el problema de la lengua y sirviéndose de ella para acuñar conductas no sexistas.

II. LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER

1. El Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Hubo que esperar al 10-12-1948, para que el Derecho Internacional aprobara una Declaración Universal de Derechos Humanos, entre los que se recogía que “todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos” (art. 1), “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (art. 2.1º). “Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción, derecho a igual protección de la ley, todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación” (art. 7)

Tras la 2ª Guerra Mundial el recuerdo de las atrocidades cometidas por los regímenes nazis llevo a la comunidad internacional a aprobar esa Declaración Universal cuyo merito reside en ser el primer documento elaborado por una Organización Internacional de carácter Universal como “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse” Un código ético colectivo de plena vigencia.

No fue ajeno a ese reconocimiento el papel de las mujeres jugado durante la II Guerra Mundial, en la resistencia contra el nazismo. Esa Declaración Universal reconoció los derechos y libertades fundamentales de todas las personas, sin discriminar entre hombres y mujeres, también reconoció en intrínseca relación con los anteriores, los derechos sociales, a los que luego me referiré, como parte de los derechos humanos. Las luchas y avances de la clase obrera en Europa y la existencia de la Unión Soviética y sus avances sociales, propiciaron esa integración o visión no formalista y estrecha de los Derechos Humanos, integrando en el catálogo de Derechos Humanos los Derechos Sociales.

Ese código ético internacional, en cuanto a los derechos de las mujeres, se ha perfilado, completado y reafirmado en multitud de ocasiones, en sucesivas normas e instrumentos internacionales de derechos humanos. (4)

Así por ejemplo, “La Convención de la ONU sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres” adoptada por la Asamblea General en su resolución 34/180 de 18-12-79 señalaba en su art. 1: “A los efectos de la presente convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denota, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social cultural y civil, o en cualquier otra esfera”

Los Estados parte de la Convención para la Eliminación de la discriminación de la Mujer de 1.979 convinieron en adoptar las medidas adecuadas que “prohíban toda discriminación contra la mujer” (art. 2.b))

“La Conferencia Mundial sobre la Mujer” celebrada en Pekín en 1995, refleja ese concepto amplio de igualdad en todas las esferas “La igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, el reparto igualitario de las responsabilidades con respecto a la familia...” (Punto 15) ... sin la plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la Sociedad, no se logrará la igualdad, el desarrollo y la paz (Punto 13), los derechos de las mujeres son también Derechos Humanos. No se avanzará en la igualdad, el desarrollo y la paz, si no se afronta un reparto equitativo del poder, y este exige acciones positivas, no solamente actuaciones sancionadoras.

También se ha ido perfilando un concepto de igualdad menos formalista, o más completo y un concepto de igualdad asociada a la dignidad, al acceso de los recursos, al desarrollo de las capacidades individuales, culturales, sociales y políticas al reparto de responsabilidades dentro de la familia...

La Constitución Europea no reconoce la igualdad entre hombres y mujeres como un principio y valor fundamental a respetar, y sí lo promulga como valor a fomentar o promover.

En este contexto, La Constitución Europea opta también por no mencionar con carácter autónomo la prohibición de la discriminación entre hombres y mujeres. Sí se prohíbe con carácter autónomo la discriminación por razón de nacionalidad, realzando su importancia. No así la discriminación por razón de sexo que se sitúa al mismo nivel que cualquier otra discriminación “por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión, opiniones políticas...” (art. 21 de la Carta). Ello se añade al elocuente silencio que tanto el preámbulo de la Constitución, como de la Carta dedican a la igualdad entre hombres y mujeres.

Ello también sirve para ocultar el doble carácter de la discriminación de las mujeres. Es decir, que la discriminación racial, la discriminación religiosa, la discriminación por la orientación sexual, por las ideas... también son discriminatorias hacia las mujeres.

En la Parte III, referente a las “Políticas y el Funcionamiento de la Unión”, se opta por no especificar una política tendente a combatir la discriminación de género, limitándose a señalar que “en todas las acciones contempladas en la presente parte, la Unión fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y, promover la igualdad”. (Sí se desarrollan con amplitud las políticas monetarias y económicas, o sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración, etc...) (5)

La transversalidad, no es incompatible con las políticas específicas, y ambas han de llevarse a cabo. Si bien es cierto que de unas y otras se ha extraído, o querido extraer, consecuencias negativas para las mujeres. De la transversalidad porque se olvida lo específico y se abandonan las estructuras propias y de las políticas específicas porque se termina haciendo guetos de los problemas sufridos por las mujeres, “cosas de mujeres”.

El eterno debate sobre igualdad y diferencia, que puede resolverse si se apunta a las raíces del sistema patriarcal, a las causas y no sólo a los síntomas, se resuelve en la Constitución Europea minimizando el concepto de igualdad y no proclamándolo como valor inquebrantable.

2. La violencia de género como violación de los derechos humanos

La violencia contra las mujeres, a pesar de su amplitud y gravedad, no se ha considerado como crimen hasta recientemente.

Es la expresión más dura y sangrante de la dominación masculina. No es un problema individual, ni desde el punto de vista de las víctimas, ni desde el punto de vista de los agresores.

La violencia se ejerce, precisamente para mantener esa dominación de hombres sobre mujeres, dominación que ha de expresarse claramente en términos de privilegios, de privilegios masculinos. (6)

Hasta recientemente muchos Gobiernos europeos no protegían a las mujeres de esa violencia, y la protección aún hoy es muy insuficiente.

Sin embargo, la Constitución Europea, a pesar del clamor feminista, no recoge expresamente la violencia de género como un crimen contra las mujeres, como una violación de los derechos humanos, ni la violencia o persecución basada en el género como causa de asilo, como veremos después. Es decir, la Constitución no prohíbe expresamente la violencia de género.

La Constitución Europea se limita en este terreno a recoger el derecho de toda persona a la “integridad física y psicológica” (art. 3 de la Carta de Derechos Humanos) y prohíbe “la tortura, las penas y los tratos inhumanos y degradantes” (art. 4 de la Carta).

La Convención encargada de la elaboración de la Carta de Derechos Humanos que luego se ha incorporado al Proyecto de Constitución, consideró que no era estrictamente necesaria esa mención específica ya que la interpretación del contenido de los art. 3 y 4 conducía al mismo resultado, (pero en el silencio).

Se aparta así la Constitución Europea de lo expresado en “La Conferencia Mundial de la ONU de 1.993 Sobre los Derechos Humanos” donde se definió la violencia de género como “violencia que pone en peligro los derechos fundamentales, la libertad individual y la integridad física de las mujeres”.

Esta actitud sólo se corresponde con una posición de defensa de los privilegios masculinos de los que hablaba antes, y del poco interés real en combatir la violencia de género que cada vez se extiende más (conflictos armados, trata de mujeres).

3. El derecho de asilo

Tras la Segunda Guerra Mundial el impacto de la huída de miles de personas de la persecución nazi, llevó a la construcción de un sistema de protección de los refugiados/as, definiéndose como tal a “toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país” (art. 1-A) . Dicho sistema se plasmó en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados aprobada en Ginebra el 28-7-51 y, su Protocolo Adicional de 21-1-67.

Dicho sistema se basa en el “principio de no devolución” de una persona a un país donde puede ser víctima de violaciones de Derechos Humanos.

La Convención tiene limitaciones. No se aplica a personas que huyen de conflictos armados, excepto que ellos tengan causa en una persecución directa por razones de raza, etnia, nacionalidad, religión u opinión política. Se tiende a considerar que la Convención de Ginebra sólo se aplica cuando la persecución proviene de los Gobiernos o Agentes estatales, pero no a aquellas personas que son perseguidas por agentes no estatales, grupos armados o por particulares. La Convención no incluye expresamente el género como una de las razones de persecución, lo que plantea problemas a las mujeres que huyen de situaciones de violencia.

Pero lo que hoy está en juego es la plena vigencia y aplicación de la Convención de Ginebra que es una garantía mínima.

La Política en contra del Derecho de Asilo se ha extendido a toda Europa y a toda la Unión Europea. Hoy existe una voluntad explícita de revisar el Derecho de Asilo, para acabar con él, o al menos recortarlo sustancialmente.

Las personas perseguidas en el mundo tienen cada día más dificultades para ubicarse en Europa. Ya no existen refugiados de los Estados miembros de la Unión Europea ya que se consideran Estados Democráticos. La huida de una mujer de su agresor doméstico en un país de la UE no permitiría pedir asilo en otro país (de la UE). Todo ello en un contexto de crecientes conflictos armados, de autoritarismo, recorte de libertades públicas, de incremento de la violencia de género en el mundo.

Así se concibe el asilo, no como un derecho individual y subjetivo, sino como una oferta pública que proviene de los Estados receptores o huéspedes.

Se pretende mantener a distancia a los refugiados, se recurre a la noción “de países seguros” si se considera que el país de origen o de tránsito es seguro, o el “asilo interno” que consiste en buscar lugares “seguros” en los países de los que se huye a personas que buscan asilo, o la noción de “falso refugiado” que encubre a la emigración económica.

A los refugiados/as se les trata como a otros/as emigrantes más. Se cierran vías legales a las personas que buscan huir de situaciones de terror, conduciendo todo ello a “estrategias de hacinamiento de refugiados en campos especiales”.

Las mujeres somos las principales víctimas de la violencia en el mundo, junto a los niños y niñas. La violencia que recae sobre millones de seres humanos, la sufrimos con aristas especiales por ser mujeres. En los conflictos armados estaremos expuestas a violaciones y abusos sexuales utilizados frecuentemente como objetivos bélicos, o como expresión de la masculinidad de las tropas. También somos perseguidas y torturadas en concepto de esposas, madres, hijas o compañeras, como arma de persecución política.

La trasgresión de normas culturales (en algunos casos el simple adulterio) provoca situaciones de riesgo, en muchos casos mortales, o son esas propias normas las que atentan gravemente contra la integridad física y psíquica (mutilación femenina).

La violencia de género debe ser incluida como persecución merecedora de la protección del derecho de asilo, tanto si se trata de mujeres que huyen de la violencia doméstica y no encuentran protección de sus Gobiernos, como si se trata de mujeres sometidas a persecución por transgredir las normas culturales o expresiones propias del sistema patriarcal.

El Proyecto de Constitución recoge el derecho de asilo (Artículos 18 y 19 de la Carta), pero no son recogidas en la Constitución las violencias de género como meritorias de la protección de Asilo, lo que en este contexto restrictivo hará muy difícil su aplicación.

4. Los derechos sexuales y reproductivos

Sencillamente, ni en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ni en la Constitución que incorpora tal Carta, se hace la más mínima mención a estos derechos.

Tal ausencia llama la atención por la especial repercusión que tienen en la vida y salud de las mujeres especialmente los derechos reproductivos y por tratarse de una de las áreas en las que el conservadurismo, especialmente el de la iglesia católica, se muestra más obstruccionista a las exigencias de las mujeres, y por donde avanza ferozmente el involucionismo en relación a las mujeres.

Tanto en la Conferencia Internacional sobre Población de Desarrollo (CIP) (El Cairo 1994) como en la Conferencia de Pekín (1995), los derechos reproductivos se definieron como el derecho a tomar decisiones reproductivas de forma informada y libre de discriminación, coerción y violencia. Es decir, en unas condiciones que permitan optar realmente de acuerdo con los propios intereses.

Se constató la interconexión de estos derechos con otros derechos humanos. Ya no es sólo la necesaria interconexión entre derechos fundamentales civiles y políticos, con los derechos económicos, sociales y culturales, sino también con los derechos reproductivos.

Cualquier Constitución que se pretenda de justicia material hacia las mujeres debe de recoger como derechos fundamentales el derecho de mujeres y hombres a decidir sobre su vida reproductiva de manera libre e informada y ejercer el control voluntario y seguro de su fertilidad libres de discriminación, coerción y violencia.

Deberá recoger también que la autonomía reproductiva implica el derecho de las mujeres al acceso al aborto seguro, legal y practicado en las redes sanitarias públicas.

Ni que decir que el reconocimiento de la libertad de opciones sexuales como derecho fundamental, o la libertad para formar uniones de personas del mismo sexo queda excluida de la Constitución.

Tales omisiones nuevamente no son casuales. Pasamos a enumerar las razones:

La defensa de los valores más opresivos para las mujeres por parte de la Iglesia Católica -que sigue negando el derecho a la utilización de anticonceptivos (incluido el preservativo) y el derecho al Aborto, a la vez que, con todo cinismo, el Vaticano critica la política de las multinacionales de la farmacia con respecto a la distribución de medicamentos contra el sida en el tercer mundo. No habría que curar la enfermedad con medicamentos si no se impedieran los medios para evitarla.

La defensa de un determinado tipo de familia heterosexual, cuna y sede de las principales expresiones del sistema patriarcal, y a su vez destino importante del consumo y de la realización de los beneficios capitalistas, así como del desarrollo de las tareas reproductivas de forma gratuita por parte de las mujeres.

No hay que olvidar que la Europa “desarrollada” exige que las mujeres desarrollen esas tareas reproductivas trabajo doméstico y educación de los hijos e hijas, en determinadas condiciones y con determinadas aptitudes.

Un mundo con un continuo declive de los indicadores de Salud en un escenario de disminución de recursos públicos destinados a servicios sociales, incluidos los servicios de salud (cada vez más privatizados)

5. Los derechos sociales y económicos

En el terreno de los derechos sociales y económicos el proyecto de Constitución está muy por debajo no sólo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también de la Carta Social Europea de Turín (18-10-1961) y su protocolo adicional de 5-5-1988 y posteriores revisiones.

Ello, en coherencia con el objetivo de esta Constitución: ser un instrumento (junto a la moneda única, la incorporación de los nuevos diez estados, el espacio judicial y policial europeo...) de la configuración de esta parte de Europa como un polo del neoliberalismo, competitivo con al unilateralismo político y la hegemonía económica y militar de los Estados Unidos. (7)

Se refuerza así un modelo económico que lleva consigo la privatización generalizada de los servicios públicos, el desmantelamiento de los logros sociales, la precarización del mundo del

trabajo y una política de inmigración de cierre de fronteras que condena a millones de personas a la miseria, no sólo desposeídos de papeles, sino de todo (de derechos sociales y sindicales...).

Así el neoliberalismo capitalista creador de enormes riquezas, genera cada vez mas desigualdades y exclusiones (8), no sólo en las relaciones con el Sur, sino en el Norte, en el propio seno de los países europeos, especialmente en la última década en los antiguos países socialistas de Europa Oriental.

Aquella Declaración Universal que decía respetar la dignidad de todos los seres humanos sin exclusión alguna se cimentaba en que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” (Art. 25).

En la Constitución Europea cualquier política social está subordinada al desarrollo del modelo económico neoliberal.

En la carta de Derechos Fundamentales “la Unión reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico general... con el fin de promover la cohesión social y territorial de la Unión”. Los servicios sociales básicos se reducen a los “servicios de interés económico general”, interés económico de la empresa privada. (Art. 36)

La Constitución Europea no garantiza un derecho básico como el derecho al trabajo, limitándose a decir que “todo trabajador, (el que tiene trabajo) tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad” (art. 31.1º de la Carta). Pero la política de empleo se define así: “La Unión y los Estados miembros se esforzarán... por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los objetivos de la Unión”. (Art. III-97)

En este contexto neoliberal, las peor paradas, junto a la población inmigrante, resultamos ser la mayoría de las mujeres (más aún las mujeres inmigrantes). Principalmente afectadas por el desempleo (asistimos a políticas de impulso a la maternidad, de retorno al hogar, de ensalzamiento de la familia, ...), por la precariedad laboral (trabajo a tiempo parcial, trabajo sumergido y clandestino...) y por el desmantelamiento de los servicios públicos y prestaciones sociales (lo que eleva la carga de las mujeres en las tareas reproductivas), por las situaciones de pobreza que nos

hacen mas vulnerables a la violencia y a las agresiones y esclavitud sexual y nos abocan a trabajos en condiciones similares a la esclavitud.

El recorte de los Derechos Humanos en este terreno nos afecta enormemente porque en vez de avanzar hacia una concepción integradora de los Derechos Sociales y Económicos como Derechos Humanos (¿Qué dignidad puede haber sin ellos?), los amputa reduciéndolos a la mínima expresión. Pero la justicia política y la justicia social sólo pueden ir de la misma mano.

La tendencia a minimizar los Derechos Humanos, en vez de a globalizarlos o extenderlos, es coherente con los objetivos que se marca la Unión Europea, y ésta es una razón de fondo para rechazar esta Constitución.

Conclusión

Con la Constitución Europea asistimos a una reducción de los Derechos Humanos, especialmente en el ámbito económico y social, a un rechazo a la incorporación de los aspectos de género a los Derechos Humanos y a la introducción de elementos “filosóficos” de regresión e involución, todo ello dando la espalda a la elaboración internacional de los Derechos de las Mujeres, fruto de largos años de esfuerzos.

Esa vuelta al plano formal de los Derechos Humanos, a la minimización de los mismos, supone un fuerte retroceso y pretende ocultar la lucha por los derechos humanos de las mujeres y los avances hacia la no discriminación y la superación de la subordinación.

Esta Constitución y los Derechos Humanos que incorpora, como el Derecho en general, no es inocente, no es inocua o ajena a las relaciones sociales sobre las que se sustenta, sino que es una construcción o una derivación de esas relaciones sociales que pretende a su vez apuntalar.

Tampoco la Constitución y los Derechos Humanos que incorpora es ajena a las relaciones sociales entre hombres y mujeres, a las relaciones de opresión de las mujeres, no es una Constitución ajena al empoderamiento de los hombres frente a las mujeres, a la subordinación de las mismas a los hombres (9). Hay que decir también que es una construcción hecha para apuntalar el sistema patriarcal, efectuando los ajustes necesarios para sacarle la mayor rentabilidad en el mundo neoliberal.

Todo ello pone de relieve que no basta con mejorar el ordenamiento jurídico, que no bastan las buenas intenciones o esperar los cambios de mentalidad. Son necesarios cambios en profundidad que afecten a las estructuras de las que emana el poder y la dominación masculina, es decir las

que sustentan el sistema patriarcal y en especial el no reparto de las tareas y responsabilidades reproductivas y domésticas en general y la resistencia a ceder el poder político, económico y cultural.

Ello sólo puede venir dado de la mano de las mujeres organizadas para recorrer ese camino, nuestro propio proceso constituyente en la vida real, partiendo de que la igualdad no se habrá alcanzado mientras millones de mujeres se vean forzadas a la prostitución, obligadas a cargar solas con las responsabilidades de procrear, hacer crecer y cuidar a niños/as, personas ancianas o enfermas, mientras haya seres privados de alimentación, mientras millones de mujeres sigan siendo agredidas y humilladas por el mero hecho de ser mujeres, privadas de salud y de vida. Tenemos esta deuda con nosotras mismas, mujeres europeas, y con todas y cada una de las mujeres del Sur que padecen esas situaciones de forma más grave.

NOTAS

(1) El Consejo Europeo reunido en Laeken (14 y 15-12-01) convocó la Convención Europea sobre el futuro de Europa que culminó sus trabajos de elaboración del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución Europea adoptandolos por consenso el 13-6-03.

La Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La Convención encargada de su redacción la aprobó el 2-10-00. El Consejo Europeo de Biantiz de 13 y 14-10-00 lo aprobó y remitió al Parlamento Europeo que dio su acuerdo el 14-10-00 y la Comisión el 6-12-00. Los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión firmaron y Proclamaron el 7-12-00 con ocasión del Consejo Europeo de Niza. Esta Carta se incorpora al proyecto de Constitución en su parte IIª.

El Proyecto de Constitución Europea contiene un Preámbulo y tres Partes. En la Parte I se contiene el Título I (artículos 1 a 6) sobre la Definición de los objetivos de la Unión que incluye un artículo sobre valores de la Unión (art. 2), otro sobre objetivos de la Unión (art. 3) y otro sobre libertades fundamentales (art. 4). El título Segundo (artículos 7 y 8) se dedica a los Derechos Fundamentales y la Ciudadanía de la Unión. (Según el artículo 4 las libertades fundamentales de la Unión son la libre circulación y el libre establecimiento conforme a la propia constitución y la prohibición de toda discriminación por razón de nacionalidad). En la Parte II se incorpora la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión (Art. II 1 a 54) y la Parte III (arts. III 1 a 314). Se refiere a las Políticas y el Funcionamiento de la Unión.

(2) El Convenio Europeo que nos habla de “Gobiernos animados de un mismo espíritu en posesión de un patrimonio común de ideales y tradiciones políticas de respeto a la libertad y la presencia del Derecho...”

La Declaración Universal de Derechos Humanos, comienza: "Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana..."

(3) En el *Presidium* de la Convención que redactó el Proyecto de Constitución de 15 miembros, solamente dos eran mujeres, los Presidentes eran tres hombres. Del conjunto de la convención las mujeres no llegaron a 20 %.

(4) Conferencias Mundiales sobre la Mujer de 1975 a 1995 Organizadas por Naciones Unidas celebradas en México 1975, en Copenhague 1980, en Nairobi 1985 y en Pekín 1995.

No se avanzará en la igualdad, el desarrollo y la paz, si no se afronta un reparto equitativo del poder y éste exige acciones positivas, no solamente actuaciones sancionadoras.

Conferencia de valoración de la Conferencia de Pekín, celebrada en Nueva York del 5 al 9 de Junio de 2000

El acceso de la mujer a la Ley es insuficiente, debido a la falta de capacidad jurídica básica y de recursos, a la insensibilidad y los prejuicios sexistas de los encargados de hacer cumplir la Ley y del poder judicial y a la persistencia de actitudes basadas en la tradición y en los estereotipos.

Conferencias Ministeriales de Consejo de Europa celebradas en Estrasburgo 4-3-86, en Viena 4 y 5-7-89, en Roma 21 y 22-10-93 y en Estambul 13 y 14-11-97 en cumplimiento del art. 14 del Convenio Europeo (art. 14 clausula de no discriminación).

(5) La referencia a las Acciones Positivas en alusión "al sexo menos representado" parece irrisoria (art. 33 de la Carta).

(6) La ONU calcula que unos cuatro millones de personas son víctimas de la trata en el mundo. Cada año, al menos 500.000 mujeres son introducidas en la UE para trabajar como prostitutas.

Se considera trata de personas: la captación, transporte o traslado de una persona, la acogida a la subsiguiente recepción de una persona y el traspaso del control sobre esa persona, así como al provocación o el fomento de cualquiera de las fases descritas.

(7) Todos los países de la Unión Europea, incluidos los diez incorporados el 1-5-04, pertenecen a la OTAN. De estos últimos la incorporación a la OTAN de Estonia, Lituania, Letonia, Eslovaquia y

Eslovenia se ha producido en Abril de 2004, justo inmediatamente antes de su incorporación a la UE, su proceso de integración en la OTAN concluyó antes de su integración en la UE.

(8) Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, mas de 40 millones de estadounidenses no tienen seguro de salud.

(9) Es expresiva, la Foto de los Líderes Europeos que posaban en Dublín, aparecida en la prensa el 2-5-04, tras la incorporación de los diez nuevos Estados: de 32 personas que posaban, sólo una era mujer (La presidenta Letona Vaira Vike-Fiebergá).